

La magnitud de este hallazgo dejó claro que no se trata de casos aislados o simples errores, sino de un fenómeno con ramificaciones estructurales que demanda una respuesta contundente. El abuso no solo erosiona la confianza en el sistema, sino que también provoca que las instituciones adopten criterios más rígidos que terminan retrasando o negando el pago a trabajadores que, con diagnósticos reales y licencias legítimas, ven comprometido su sustento y el de sus familias. Por ello, esta reforma no debe entenderse como una barrera para acceder al derecho, sino como un mecanismo de protección para quienes realmente lo necesitan. Su éxito dependerá de la correcta aplicación de la ley, de una fiscalización oportuna y efectiva, y del compromiso ético de los médicos, empleadores y trabajadores. La licencia médica existe para salvaguardar la salud y estabilidad económica del trabajador durante su recuperación, y su ejercicio responsable es condición indispensable para preservar la equidad y sostenibilidad del sistema.